

§ 276. López Alvarez. TS 1.ª S 588/1998, de 19 junio

## § 276.—ACUMULACION DE AUTOS Y NULIDAD DE ACTUACIONES: INDEFENSIÓN POR NO ACORDARSE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO

*Belisario López Alvarez c. Ismael y Roberto López Cabrera.*

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia 588/1998, de 19 de junio, recurso núm. 2029-1996.

Civil: recurso de casación (impugnación de la división del caudal hereditario).

Magistrado Ponente: Fernández-Cid de Temes.

Abogados: no constan.

### Hechos y cuestiones jurídicas

*Ismael López interpuso el 24 de noviembre 1994 demanda contra su padre (Belisario López) y contra su hermano Roberto, impugnando la división del caudal hereditario realizada por los contadores-repartidores en relación con la herencia de su madre, demanda de la cual conoce el Juzgado n.º 3 de Ponferrada. Dos meses más tarde (31 de enero 1995), el padre presentó demanda frente a los dos hijos impugnando igualmente la división de los bienes de la herencia, demanda que por reparto conoce el Juzgado n.º 4 de la misma localidad. Ismael López decide no comparecer en el segundo proceso y solicita ante el Juzgado donde pende la primera demanda la acumulación de autos, pues se dan los requisitos de tal acumulación (art. 162.1 LEC). El Juzgado n.º 3 acuerda dicha acumulación, pero el requerimiento no llega nunca al otro Juzgado, por lo que el proceso en rebeldía continúa hasta dictarse sentencia de condena. Frente a ella recurre Ismael López (uno de los demandados en rebeldía) primero en apelación y posteriormente en casación solicitando la nulidad de todo lo actuado.*

*La cuestión que se debate en casación es si la no suspensión de las actuaciones en el segundo proceso ha generado indefensión a los demandados, que vicia de nulidad todo lo actuado.*

### Fallo

*La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula lo actuado y ordena retrotraer las actuaciones al momento en que el Juzgado n.º 3, después de acordar la acumulación de autos, debió cursar requerimiento al Juzgado n.º 4.*

### Fundamentos de Derecho

*Primero:* La cuestión litigiosa trae causa, como se dice en la sentencia de primera instancia, del juicio voluntario de testamentaría seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Ponferrada, con el núm. 218/1992, en el que tras el inventario de los bienes de la causante Dª Blanca C.F. y presentación de cuadernos particionales por las dos partes (viudo e hijos), una vez que había actuado el contador partidor dirimente y

llegados al trámite del art. 1088 LEC, disconformes las partes esencialmente en la forma de hacerse la división del caudal, D. Ismael L.C. presenta demanda, en 21 de noviembre de 1994, interesando una concreta distribución de la herencia, contra su hermano D. Roberto L.C. y contra su padre D. Belisario L.A., ocurriendo que se manda a reparto y corresponde con el núm. 23 de 1995 al Juzgado número Tres de la propia ciudad; a su vez, D. Belisario L.A. presentó demanda, en 31 de enero de 1995, con idéntica fi-

nalidad, pero propugnando otra distribución, contra sus hijos Ismael y Roberto, correspondiendo al Juzgado número Cuatro, con el núm. 53/1995, procedimiento en el que, tras emplazamiento personal, son declarados en rebeldía. D. Ismael L.C. solicita en el procedimiento por él instado, núm. 23/1995, la acumulación de autos, al concurrir la triple identidad de personas, cosas y acciones, pidiendo la acumulación de los núm. 53/1995 del Juzgado número Cuatro a los núm. 23/1995 del Juzgado número Tres, por

ser el más antiguo, interesando igualmente la suspensión del curso de ambos procedimientos mientras se tramitase la acumulación solicitada. El Juzgado número Tres dicta auto, en 17 de marzo de 1995, accediendo a la acumulación y mandando librar oficio interesando la remisión al Juzgado número Cuatro; con fecha 23 de marzo de 1995 aparece dictada una providencia por el Juzgado número Tres en la que, tras tener por contestada la demanda por D. Belisario L.A., se dispone lo siguiente: «líbrese oficio acordado en auto de fecha 17 de marzo interesando del Juzgado número Cuatro la remisión de los autos 53/1995». En este último procedimiento no consta como recibido el oficio reclamándole los autos, por lo que siguió el curso de los mismos, en rebeldía de los demandados, hasta dictar sentencia, estimatoria de las pretensiones de D. Belisario L.A., en 29 de septiembre de 1995, notificada personalmente a aquéllos, por lo que D. Ismael L.C. interpuso recurso de apelación, siéndole admitido a trámite y practicándose prueba en el mismo, consistente en testimonio de los autos núm. 23/1995 del Juzgado número Tres, en el que constan los datos a que se ha hecho alusión.

D. Ismael L.C. interesó en la alzada la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento núm. 53/1995 a partir del auto de 17 de marzo y providencia del 23 de los propios mes y año 1995, y en los que se había accedido a la acumulación, mandando librar el oficio.

La Audiencia desestimó la apelación por entender: que la irregularidad procesal no constaba en el proceso 53/1995, en el que no se había recibido oficio interesando la remisión de los autos; que cuando D. Ismael fue emplazado en dicho procedimiento el 15 de febrero de 1995 ya había interpuesto su demanda (proceso núm. 23/1995 del Juzgado número Tres), pero no hizo manifestación alguna; y que en la apelación nada había alegado contra la ponderación realizada por el Juzgador de la primera instancia en

su sentencia, cuyos fundamentos de Derecho compartía la Audiencia.

Todo cuanto antecede constituye el motivo del recurso de casación interpuesto por D. Ismael L.C., quien acusa infracción del art. 184 LEC, en cuanto establece que «desde que se pida la acumulación quedará en suspenso la sustanciación de los pleitos a que se refiera», de manera que el Juzgado número Cuatro no podía dictar más resoluciones que la contestación otorgando o denegando la acumulación, debiendo reponerse las actuaciones al momento de petición o solicitud de la acumulación, pues es nulo lo actuado al no hablar la ley del momento en que se reciba la comunicación.

Sin prejuzgar sobre competencia, cuestión no alegada, ni sobre el fondo del asunto, ajeno al planteamiento casacional, es llano que, aunque no se concreta el precepto de amparo en que trata de incardinarse el motivo, de los señalados en el art. 1692 LEC, infringiéndose así el mandato del art. 1707, hablándose incluso de infracción de ley, sin embargo se denuncia un *vicio in procedendo*, claramente en cuadrable en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, produciendo indefensión a quien lo denuncia (núm. 3º del art. 1692) que, si bien no dijo que tenía entablado procedimiento anterior cuando fue emplazado en el núm. 53/1995 del Juzgado número Cuatro, manteniéndose en rebeldía, al solicitar ante ello la acumulación al núm. 23/1995 del Juzgado número Tres pensaba que las peticiones se iban a decidir en un solo proceso, con posibilidad para las partes de practicar las pruebas pertinentes, por lo que no puede achacársele negligencia y actuó con arreglo a derecho al pedir la acumulación y posteriormente, al apelar, la nulidad y reposición de lo actuado al momento en que se accedió a ello, sin que pueda atribuírsele lo que es defectuoso actuar de los órganos jurisdiccionales, ya que el Juzgado número Tres debió librar el oficio pertinente y la Audiencia, al practi-

car prueba en el rollo de apelación y conocer lo ocurrido, acceder a lo solicitado, por depender los dos Juzgados de ella, proveyendo incluso lo pertinente para averiguar lo ocurrido y deslindar posibles responsabilidades ante situación tan anómala. Y a idéntica conclusión se llega si se tiene en cuenta la reposición de actuaciones pedida (ver art. 1715.1,2º). Nadie pone en duda que el Juzgado número Cuatro de Ponferrada procedió como debía al no tener constancia de lo acordado por el de igual clase número Tres, pero tampoco la hay del quebrantamiento de los actos y garantías procesales cometidas por éste, que la Audiencia no corrigió, no obstante ser ajeno a ello el apelante, al que no debe imponérsele soportar las consecuencias perjudiciales.

Como la actuación del Juzgado número Tres, al no librar el oficio después de acceder a la acumulación, ha de tenerse por viciosa y produjo indefensión, dado el carácter imperativo del art. 184, estableciendo el art. 238.3 LOPJ que serán nulos de pleno derecho los actos judiciales cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley, habiendo producido tal actuar indefensión para el hoy recurrente y teniendo que hacerse valer tal nulidad por medio de los recursos establecidos en la Ley contra la resolución de que se trate, procediéndose a insistir en que la nulidad de actuaciones no prejuzga el contenido de la contestación que deba dar el Juzgado número Cuatro de Ponferrada al oficio del número Tres de igual ciudad, siquiera la Audiencia, superior común de ambos, deba proveer para aclarar lo ocurrido.

*Segundo:* Al haber lugar al recurso, cada parte satisfará sus costas causadas en el mismo, sin que proceda pronunciamiento sobre las de las instancias al reponerse las actuaciones al momento en que debió librarse el oficio solicitando la acumulación de autos.

## COMENTARIO

La presente sentencia resuelve, como el propio Tribunal Supremo indica, una «anómala situación» procesal, que tiene su origen en un defecto procesal imputable a un órgano jurisdiccional. Acordada la acumulación de autos por el órgano judicial que conoce del pleito más antiguo (Juzgado n.º 3), sin embargo, y por motivos que no constan, el juzgado ante el cual pende el segundo proceso (n.º 4) no llega a recibir el requerimiento para la remisión de los autos. La parte (que es demandante en el primer proceso y demandado en el segundo), confiada en que una vez pedida la acumulación de autos, ambos procesos quedarían en suspenso hasta que fueran acumulados (como dispone imperativamente el art. 184 LEC), decide no comparecer en el segundo proceso, siendo declarado en rebeldía.

Esa situación de rebeldía no hubiera generado ningún perjuicio al mismo si, como era previsible, los procesos se hubiesen suspendido y acumulado después (pues concurrían los requisitos legales para la acumulación de autos). Pero, el problema surge cuando ese segundo proceso no llega a suspenderse, porque el órgano jurisdiccional nunca llega a tener noticia de esa petición de acumulación ni a recibir el requerimiento del otro Juzgado, y dictó sentencia condenando al demandado rebelde.

El demandado (condenado) en ese segundo proceso entiende que se ha producido un defecto procesal que vicia de nulidad de lo actuado, y solicita, primero en apelación y después en casación, que se subsane la situación de indefensión. El Tribunal Supremo declara nulo lo actuado en el segundo proceso *por haberse prescindido total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley, produciéndose indefensión a una de las partes litigantes* y ordena reponer las actuaciones al momento en que debió acordarse la suspensión del segundo proceso.

No vamos a analizar aquí esta cuestionable fundamentación jurídica, en la que parece que se confunden y entremezclan los dos supuestos de nulidad que contempla el art. 238.3 LOPJ, pues ello nos obligaría, una vez más, a reflexionar acerca de las nulidades procesales y en concreto, acerca de su poco afortunada regulación en el art. 238.3 LOPJ (acerca de las distintas interpretaciones del art. 238.3 LOPJ, *vid.* por todos, J.M. MARTÍN DE LA LEONA, *La nulidad de actuaciones en el proceso civil*, Madrid, 1991, págs. 157 y ss.).

En este peculiar y atípico caso, sí interesa analizar la situación de indefensión. El Tribunal Supremo afirma aquí, sin dubitación alguna, que la infracción del art. 184 LEC —al no suspenderse el segundo proceso, a pesar de haberse solicitado y admitido la acumulación de autos en el primero—, ha situado a la parte en situación de indefensión.

A primera vista, es la solución más razonable para evitar que el error de un órgano judicial redunde en un perjuicio inesperado al justiciable. Pero, ¿realmente se ha producido indefensión para alguna de las partes en este proceso? ¿Puede apreciarse una situación de indefensión en un proceso en el cual no se ha vulnerado ninguna garantía procesal? ¿Qué garantía esencial se ha conculcado para poder apreciar la causa de nulidad? ¿Es posible decretar la nulidad de lo actuado en un proceso, sobre la base de un defecto procesal cometido en otro proceso? Para responder a estos interrogantes, es preciso detenerse en analizar el significado de la indefensión procesal.

El derecho a no padecer indefensión, que aparece elevado a rango constitucional en el art. 24.1 de nuestra CE, es un derecho de significado amplio e impreciso, que prohíbe la ilegítima restricción o privación de los medios de defensa (sobre el concepto de indefensión, por todos, *vid. in extenso* I. DIEZ PICAZO (con I. Borrajo Iñiesta y G. Fernández Farreres), *El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo*, Madrid, 1995, págs. 93 y ss.; del mismo autor «Art. 24: garantías procesales» en la obra colectiva *Comentarios a la Constitución Española de 1978*, Madrid, 1998, págs. 48 y ss.; G. SERRANO HOYO, *La prohibición de indefensión y su incidencia en el proceso*, Granada, 1997). A través de la abundantísima jurisprudencia constitucional acerca del art. 24.1 CE han ido perfilándose los elementos que permiten definir la indefensión, o como ha dado en llamarse, *el juicio de indefensión* en la instancia constitucional. Entre esos elementos, el Tribunal Constitucional reiteradamente ha exigido 1) que la privación de los medios de defensa tenga su origen en la infracción de una norma procesal y 2) que la privación de medios de defensa no sea imputable a quien alega la indefensión, es decir que no sea consecuencia de una falta de diligencia por parte del litigante, su representante o su abogado (entre otras SSTC, 68/1986, de 27 de mayo, 109/1985, de 8 de noviembre, 102/1987 de 17 de junio, 211/1991, de 11 de noviembre). Dicho lo anterior, resta por preguntarse, ¿se dan esos elementos en el presente caso?

Empecemos por el segundo requisito: que la privación del derecho de defensa no sea imputable a un comportamiento poco diligente de la parte o sus representantes. ¿Actuó nuestro demandado con la dili-



gencia debida? Aquí difieren la apreciación de la Audiencia y del Tribunal Supremo. En segunda instancia, se estima que la actuación del demandado no fue del todo diligente, pues pudo comparecer en el segundo proceso a los efectos de presentar la excepción de litispendencia o, al menos, para informar de la petición de acumulación de autos en el primer proceso.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en sentido contrario, considera que «no puede achacársele negligencia y actuó con arreglo a derecho al pedir la acumulación». ¿Cuál es la diligencia exigible a la parte para concluir que no le es imputable la privación del derecho de defensa? No existen reglas generales para valorar el grado de diligencia exigible, y sólo analizando las actuaciones de cada caso podrá determinarse si fue la propia negligencia del justiciable la que contribuyó a crear o a que no se subsanara la posible indefensión.

En el presente caso, es cierto que si el demandado, ahora recurrente en casación, hubiera comparecido en el segundo proceso, con el fin de informar de la pendencia de otro proceso con el mismo objeto y partes, la indefensión no se hubiera producido. Pero es erróneo concluir que «como el demandado pudo haber evitado la indefensión, al no hacerlo, actuó negligentemente». En la decisión de mantenerse en rebeldía, a mi modo de ver, no puede apreciarse un comportamiento doloso, negligente o producto de la impericia de un abogado. La opción por mantenerse en rebeldía y esperar a que se acumularan los autos era una decisión razonable, sensata, aceptada por la ley e incluso conveniente desde la óptica de la economía procesal. Por tanto, si hubo una situación de indefensión, ésta en ningún caso podría serle imputada a la parte o a su abogado, y no debe entenderse que el justiciable debe estar atento y diligente para subsanar las infracciones del órgano judicial. Como afirma G. SERRANO HOYO (ob. cit., pág. 284) ello «sería tanto como justificar, de partida, que éstos (los órganos judiciales) pueden dejar de cumplir las normas y garantías procesales por el mero hecho de que el justiciable va a poder exigir posteriormente su cumplimiento».

Nos falta analizar el primer requisito: privación del derecho de defensa con origen en la infracción de una norma procesal. En el presente caso se afirma que se ha infringido lo dispuesto en el art. 184 LEC. Ese precepto dice textualmente: «Desde que se pida la acumulación, quedará en suspenso la sustanciación de los pleitos a que se refiere.» Como ya señalaba GUASP, el comienzo de esa suspensión ha de entenderse de manera diferente según se trate del juez requirente o del juez requerido. respecto del requirente, éste deberá acordar la suspensión en el momento en que se le presente la solicitud y se dicte resolución acordando tramitarla. Pero, respecto del juez requerido, el momento de la solicitud no puede ser el que determine la suspensión del proceso que ante él se tramita, pues «como es lógico, ignora entonces la existencia de la petición» (vid. J. GUASP, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, t. I, Madrid, 1943, pág. 562; acerca de la tramitación de la acumulación de autos vid. también T. ARMEN- TA DEU, *La acumulación de autos*, Madrid, 1997, págs. 264 y ss). El juez requerido tiene la obligación de suspender el proceso tan pronto como reciba el oficio del juez requirente, y no antes.

¿Cuál es la infracción que se ha cometido en el caso resuelto por esta sentencia? De su lectura no se sabe a quien ha de ser imputada la posible infracción: no consta en los autos si la falta de suspensión del segundo proceso es imputable a un error del Juzgado n.º 3 que nunca envió el requerimiento, o al Juzgado n.º 4, que tras- papeló dicho requerimiento, y por tanto, nunca se tuvo constancia del mismo en el proceso que nos ocupa. Sólo si ocurrió esto último, la norma infringida sería la del art. 184 LEC, pues si el requerimiento nunca llegó a enviarse, la obligación de suspender el proceso por parte del juez requerido no llegó a existir nunca. Sea como fuere y con independencia de a qué órgano judicial en concreto sea imputable el error en la tramitación de la acumulación, lo cierto es que ha habido infracción de una norma procesal, aunque, en sentido estricto, esa infracción no ha producido directamente una merma del derecho de defensa en el segundo proceso.

Si nos atenemos a la realidad de los hechos, en el proceso instado por Belisario ante el Juzgado n.º 4, los demandados en ningún momento se vieron privados de su derecho de defensa, pues gozaron de todas las oportunidades procesales de alegar y probar, aunque debido a su propia voluntad no hicieran uso de ellas. Dicho de otro modo, la situación de rebeldía en ese segundo proceso fue voluntariamente asumida, por razones de conveniencia, de economía o de comodidad, pero sobre todo, por la convicción de que tal proceso iba a ser suspendido y acumulado al iniciado con anterioridad. Si no se ha producido ninguna infracción de norma procesal en este proceso y no se ha privado al demandado de su oportunidad de defenderse, ¿puede hablarse de indefensión? ¿Puede acordarse la nulidad de actuaciones en un proceso en que no ha habido infracción de norma, ni tampoco indefensión? Si nos atenemos a los parámetros sentados por la doctrina del Tribunal Constitucional al delimitar el *juicio de indefensión*, la respuesta ha de ser negativa, aun reconociendo que se ha producido un perjuicio para la parte.

§ 276. López Alvarez. TS 1.ª S 588/1998, de 19 junio

Es cierto que no puede establecerse una perfecta relación de causa-efecto entre la infracción de la norma y la merma del derecho de defensa, pero, en definitiva, la infracción de lo previsto en el art. 184 LEC (o la falta de envío del requerimiento) ha incidido –aunque de modo indirecto– en que se dictara una sentencia *inaudita altera pars*. Si bien la situación de rebeldía fue asumida por voluntad expresa de la parte (lo que en principio excluiría la indefensión, *vid.* STC 112/1987, de 2 de julio), tal decisión se adoptó precisamente porque conforme a la regulación legal de la acumulación de autos, ese segundo proceso estaba destinado a ser suspendido y tramitado unido al primer proceso. El demandado, al decidir no comparecer, no estaba renunciando a su derecho de defensa, sino que confiado en la suspensión del proceso, esperaba ejercerlo en un único proceso, una vez acordada la acumulación de autos. En este sentido ha de valorarse el buen criterio del Tribunal Supremo: el error de un órgano judicial no debe redundar en perjuicio de un justiciable que actúa de buena fe, con la diligencia exigible, de conformidad con las normas procesales, y confiado en que los jueces realizarán correctamente su función.

Situaciones como la presente deben hacer reflexionar acerca de la validez de los elementos que según el Tribunal Constitucional componen el juicio de indefensión. Son criterios de exigencia general, pero no de carácter absoluto. Al igual que pueden apreciarse situaciones de indefensión sin infracción de norma procesal alguna como, por ejemplo, cuando se da una situación de rebeldía involuntaria a pesar de la correcta notificación procesal (al respecto *vid.* lo que ya dije en *La rebeldía en el proceso civil norteamericano y español*, Madrid, 1995, pág. 230, y en igual sentido I. DIEZ-PICAZO, «Art. 24: garantías procesales», *cit.*, pág. 50: la infracción de una norma procesal «es el único elemento que no resulta necesario en todo caso»), también podrá apreciarse una situación de indefensión, aunque ésta no se haya originado directamente por la infracción de una norma procesal. En este curioso y atípico supuesto, la indefensión no se produce directamente por la infracción de la norma procesal, sino precisamente porque, al no aplicarse esa norma imperativa –con clara quiebra de la seguridad jurídica–, tal como era de esperar, se alteran las legítimas expectativas de defensa procesal de la parte.

El Tribunal Supremo resuelve acertadamente la situación de indefensión, realizando una interpretación integradora de los requisitos de nulidad del art. 238 LOPJ, y en especial del contenido de la indefensión. A efectos prácticos, resta por plantear quién debe asumir los desembolsos económicos que esa incorrecta actuación judicial ha originado. Como consecuencia de la inaplicación de lo previsto en el art. 184 LEC (o del extravío del requerimiento), la parte se ha visto obligada a interponer dos recursos, primero apelación y después casación, hasta lograr subsanar la situación de indefensión. Un enorme esfuerzo procesal y económico del cual no va a verse resarcido el litigante, a menos que hiciera efectiva la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración por error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, conforme al art. 292 y ss. de la LOPJ.

Lorena Bachmaier Winter.  
Profesora Titular UCM

§ 277. Padrón Mena y Peña Medina. TS 1.ª S 1152/1998, de 14 diciembre

## § 277.—TRATAMIENTO PROCESAL DE LA INADECUACION DE PROCEDIMIENTO EN EL RECURSO DE CASACION CIVIL: IMPROCEDENCIA DEL MOTIVO, CUANDO EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO OFRECE MAS GARANTIAS QUE EL ADECUADO

*Ildefonso Padrón Mena y Rosario Peña Medina c. José-Tomás Pérez Rodríguez.*

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia 1152/1998, de 14 de diciembre, recurso núm. 1847-1998.

Civil: recurso de casación (juicio ordinario de menor cuantía: reclamación de cantidad).

Magistrado Ponente: Morales Morales.

Abogados: no constan.